

opinión

HACE 25 AÑOS

Roberto Díaz Herrera, jefe del G2 de la Guardia Nacional, anunció el arresto de los hermanos Sánchez Miranda, por los atentados con explosivo dados en la ciudad de Panamá.

La Prensa

FUNDADO EN 1980
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa

PRESIDENTE
Fernando Berguido

PRESIDENTE FUNDADOR
I. Roberto Eisenmann Jr.
DIRECTORES EMÉRITOS
Winston Robles
Guillermo Sánchez Borbón

DIRECTORA
Siaska S. Salcedo S.

SUBDIRECTORES
Rolando Rodríguez B.
Lourdes de Obaldía

EDITORES:
Gionela Jordán y Cecilia Fonseca,
(Jefas de Información), Juan Luis Batista
(Política), Zoraida Chong (Sociedad),
Elizabeth Garrido (Judiciales),
Mileika Bernal (Nacionales), Liz Carrasco
(Opinión), Rafael Calvo (Deportes), Yasmina
Reyes (Mundo), Diego Quijano (Negocios),
Tamara del Moral (Vivir +), Edwards Santos
(Fotografía), Marianella Ferrer (Defensora del Lector),
Luzmila de Flamarique (Corrección)

GERENTE GENERAL ENCARGADO:
César A. Tribaldos Giráldez
GERENTES: María E. de García de Paredes
(Finanzas), Irma de Real (Comercialización),
Juan Carlos Planells (Operaciones),
Julio Moltró (Nuevos Medios)

La opinión de La Prensa se expresa únicamente
en el **HoydHoy**. Los artículos de opinión así
como las caricaturas son responsabilidad
exclusiva de sus autores.

REDACCIÓN: 221-7515 - **PUBLICIDAD:** 323-7400
ADMINISTRACIÓN: 221-7537 - **SUSCRIPCIONES:**
222-9030 - **SUPLEMENTOS:** 323-7264

[OPINIÓN DE VIC]



CRISIS ALIMENTARIA PODRÍA DESATAR GUERRA.

Panamá necesita una política agropecuaria

Arturo C. Castillo E.

opinión@prensa.com

El Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en reiteradas ocasiones ha lanzado advertencias sobre la crisis alimentaria a escala mundial y de su posible extensión, no necesariamente por escasez de los productos básicos, sino por el alza indiscriminada en los precios de los fertilizantes y del petróleo. El director de este reconocido fondo, Jacques Diouf, ha enfatizado en que los gobiernos no pueden confiar únicamente en la fuerza de los mercados para contrarrestar el incremento de precios en los principales granos de la canasta básica.

En la República de Panamá, la importación de algunos granos es un paliativo digno de elogiar, pero se hace pertinente aplicar medidas más agresivas en el sector productivo panameño. A manera de referencia, en la década del

70 nuestro país era deficitario en la producción de arroz y no fue hasta mediados del 80 que se estableció una política de fortalecimiento del agro y de sustitución de importaciones. Se crea al MIDA como regente de la política agropecuaria y, a la vez, instituciones tales como el BDA, IMA, ISA, IDIAP, como parte de una estrategia diseñada para crear las condiciones de un efectivo desarrollo del sector primario y así mejorar la calidad de vida de los habitantes en áreas rurales.

Con el fortalecimiento de la Reforma Agraria, también se creó la Asociación de Productores en Cooperativas y Asentamientos Campesinos para facilitar las tierras y legalizar los terrenos de los productores que no contaban con el amparo legal. Adicional, se estimuló a la Escuela Nacional de Agricultura en el sector de Divisa y a la de Agronomía, hoy, Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad de Panamá. Adicional, se estimulaba a los productores con

todas las facilidades crediticias a través de la extinta Empresa Nacional de Maquinarias Agrícolas (Endema). A inicios de la década del 80 y gracias a un plan agresivo se obtuvo un óptimo nivel de autosuficiencia en la producción de arroz mediante la aplicación de tecnologías modernas en el uso de semillas certificadas, asistencia técnica y, sobre todo, en el aspecto del seguro agropecuario. De igual manera, se estableció el muy conocido precio de sostén y apoyos para el uso de silos, secadoras y molinos en los sectores productivos del territorio nacional.

En consecuencia, las políticas del FMI y del Banco Mundial crearon en la última década una desaceleración producto de la eliminación de los estímulos a la producción de los granos básicos y otros rubros presumiendo que éstos podían ser importados a precios más bajos, obligando a nuestros arroceros a incursionar en la producción de rubros no tradicionales. La Comi-

sión Económica para América Latina (CEPAL) reiteró que si se confirma un aumento en los precios de alimentos en 15%, la indigencia en la región latinoamericana crecerá de 68.5 millones a 84.2 millones de personas, lo que se traduce en un llamado de alerta directo a los gobernantes de la región para que fortalezcan el sector primario en sus respectivos países. Lastimosamente, los productores latinoamericanos y los de Panamá no escapan de la mala práctica del "juega vivo" que incentiva una especulación salvaje en el precio final a los consumidores, bajo la excusa de la imperante inflación en distintos rubros a nivel mundial.

En resumen, hoy más que nunca necesitamos una política agropecuaria de vuelta al campo que incluya a los micros, medianos y grandes productores, considerando que se hace inevitable intensificar los programas agropecuarios que permitan a ciertos sectores de la población tener la facultad de

producir sus propios alimentos. Los grandes exportadores de granos básicos y de *commodities* están aplicando una política de retención de sus principales productos con el objeto de no enfrentar un desabastecimiento y fortalecer su autosuficiencia tanto de alimentos como de materias primas. Lo anterior debe hacernos reflexionar sobre el rumbo que va tomando nuestro sector primario y de la ineludible necesidad de implementar políticas de Estado encaminadas a preservar y fortalecer nuestra soberanía en la producción de alimentos. Finalmente recordamos que los expertos vaticinan que la próxima guerra mundial será por causa de la alimentación y de los recursos hídricos. Extendemos estas reflexiones a las entidades encargadas de dirigir los destinos en materia agropecuaria en la República de Panamá.

Estudiante de Periodismo, IV Año

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.

Un tirano, al banquillo

José E. Mosquera

opinión@prensa.com

Sudán es uno de los países africanos que enfrentan uno de los más crueles y repudiados genocidios en la historia reciente de la humanidad. Por eso, no es sorprendente que el Fiscal Supremo de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo haya solicitado una orden de detención en contra del presidente Omar Hassan al-Bashir, a quien acusa de crímenes de lesa humanidad, exterminios, torturas, violaciones y desplazamientos forzados.

Este tirano, al igual que otros tantos opresores africanos como Teodoro Obiang Nguema, de Guinea Ecuatorial, y Robert Mugabe, en Zimbabue, que han impuesto oprobiosos regímenes de torturas, represión y desapariciones, ameritan ser juzgados de manera ejemplar por violadores de los derechos humanos y propiciadores

de crímenes de lesa humanidad.

Al-Bashir desde que asumió el gobierno de su país, tras un golpe de Estado en 1989, impuso en Sudán un régimen de terror que ha limitado las libertades y cometido crueles matanzas no solo en Darfur, sino en otras regiones del país. De hecho, ha sido un régimen contemplativo con las atrocidades de las milicias fundamentalistas Janjawid, formadas en su mayoría por miembros de la tribu Abdala, las cuales desde hace cinco años ejecutan uno de los peores genocidios en el mundo.

Al-Bashir, con su ascenso al poder, desconoció los acuerdos de paz que habían puesto fin a la primera guerra civil y transformó al país en un Estado islámico. Por consiguiente, derogó la autonomía del territorio cristiano del sur y despojó a sangre y fuego a las tribus cristianas de las tierras fértiles y se las entregó a las árabes.

Ahora, la islamización de Sudán no es asunto reciente, es una

cuestión que se originó en la Edad Media y se consolidó en el periodo del sultanato, en el que la dinastía de gobernantes con nexos tribales árabes adoptó el Islam como el credo religioso oficial y las costumbres árabes como normas de comportamiento social y político.

Un ideario político fue retomado por las élites árabes cuando se consumó la independencia en 1956 y fue por eso que se desató en 1957 la guerra civil entre las fuerzas islámicas del norte y las cristianas y animistas del sur.

Esta guerra terminó en 1972 con un armisticio entre el Gobierno y las fuerzas separatistas del sur, en el cual se proclamó la autonomía del territorio del sur. Sin embargo, al-Bashir al llegar al poder suprimió esa autonomía y promulgó unas reformas para consolidar la islamización, pero terminó reactivando la guerra.

En 2003 se firmó un armisticio que dio paso a la instauración de un gobierno de reconstrucción

nacional, que puso fin a la guerra entre el norte y el sur. Pero se desató la guerra abierta en la región de Darfur, un territorio situado al oeste y dividido en tres Estados federalizados, de los 26 que tiene el país.

Una división que obedeció a una estrategia política de convertir a las tribus árabes en mayoría en cada uno de los Estados y, de paso, aumentar su predominio económico y político sobre los otros clanes que con la fragmentación, los exterminios y los desplazamientos quedaron siendo minorías.

La guerra de Darfur no es un conflicto entre musulmanes y cristianos, en virtud de que la mayoría de la población de los tres Estados es musulmana, sino una guerra entre clanes de origen árabe dedicados al pastoreo de ganado y las tribus nativas, en su mayoría agricultores.

Indudablemente, es una lucha tribal que tiene como trasfondo el control de las regiones de Bentiu y Renk, que concentran las más gran-

des reservas de petróleo, níquel, uranio, las tierras más fértiles y las principales fuentes de agua del país.

Los acuerdos de cese al fuego que se han firmado desde 2004 y reiterado el año pasado han sido frecuentemente violados por las milicias Janjawid, con el apoyo de fuerzas del Gobierno que llevan a cabo campañas de limpieza étnica con violaciones a las mujeres de las tribus no árabes, utilizando las matanzas, los exterminios, las quemaduras y los saqueos de aldeas como instrumentos de guerra para expulsar a millares de personas de sus territorios.

De acuerdo con las estadísticas de la ONU, en los últimos cinco años han muerto mil sudaneses y diariamente otros millares se refugian en los países vecinos, como consecuencia de las limpiezas étnicas de la Janjawid.

El autor es periodista y escritor